



XXXIII Congreso Internacional de la SOMEDE  
Colima, 11-14 de octubre de 2022.

**Mesa:**

Procesos Electorales Comparados.

**Título de la ponencia:**

Rendimientos electorales y sus impactos para el  
régimen de gobierno coalicional en México (1997-2021).

**Autor:**

Dr. Víctor Alarcón Olguín

**Institución:**

Universidad Autónoma Metropolitana / Iztapalapa

**Contacto:** [victor630215@aol.com](mailto:victor630215@aol.com)

**Resumen:**

La legislación electoral mexicana permite que haya posibilidad de integrar candidaturas comunes y / o coaliciones entre los partidos políticos nacionales, para competir por los diversos cargos de elección popular en México. Lo que se trata de explorar con las estadísticas electorales disponibles, es valorar como los partidos han empleado dicha figura para competir tanto por la presidencia de la república y el control de las cámaras legislativas y las gubernaturas. De esta manera, se tratará de observar el nivel de convergencia en los patrones observados en cada tipo de elección. La hipótesis inicial es que se puede generar cierto patrón de comportamiento común, pero ciertamente dichas tendencias se refuerzan en la medida que se halle un actor central o pivote alrededor del cual se puedan dar dichos procesos.

De esta manera, la ponencia tratará de explicar que los elementos tendientes a una centralización y concentración son una tendencia relevante asociada con el realineamiento general del sistema en 2018, y cuya tendencia hace prever que un actor dominante y creciente, como lo es el partido Morena, podría ir disminuyendo la necesidad de participar en coalición con otras fuerzas políticas, si bien esto aún no es previsible de que ocurra en el futuro inmediato de cara a las elecciones federales de 2024.

**Palabras clave:** Coaliciones electorales. Sistema de Partidos. (Re)alineamientos. México.

- Material sólo para discusión. Prohibida su difusión o cita sin permiso expreso del autor.  
Copyright2022@victormanuelalarconolguin.

## **Introducción**

El régimen electoral mexicano ha permitido a lo largo de su proceso transicional diversos esquemas que permiten a los partidos políticos optar por la presentación de candidaturas a los cargos de representación popular. En este trabajo se hará inicialmente una aproximación a revisar primero las condiciones marcadas por las diversas legislaciones que han estado vigentes desde los comicios de 1997 al presente (considerando como último proceso de renovación federal el celebrado en 2021), para luego ver los efectos iniciales que ello ha tenido para las condiciones y calidad de la competencia entre los partidos concurrentes a dichos procesos. Y posteriormente se hará una valoración de cómo ello ha repercutido en las condiciones de alineamiento con que los propios partidos se trasladan a la formación de alianzas de gobierno y de tipo parlamentario.

La hipótesis de trabajo que se maneja como base general de este ejercicio remite a considerar que en la medida que se restringen las reglas para la formación de alianzas (sea en formato de coaliciones, candidaturas comunes, o en su modalidad mixta como prevalece actualmente), ello debe repercutir en las decisiones estratégicas de presentar no coaliciones totales, sino colocarse sólo en la postulación de dichos cargos en los distritos de mayoría relativa, preservando por separado (aprovechando que la legislación lo permite) el espacio de las listas de representación proporcional a efecto de incorporar en dichos listados a las y los militantes que resulten beneficiados por los procesos de contiendas internas o por las designaciones hechas directamente por los liderazgos partidistas.

Una segunda hipótesis que considerar se refiere al hecho de que las reglas electorales presionan a que los partidos políticos demuestren (al margen de formar o no dichas coaliciones) la obtención de un mínimo de votación a nivel nacional para así conservar su registro como organización (en este caso, debiendo ser el 3% del total de votos válidos. Esta situación por lo regular resulta confusa para el electorado, en tanto no posee la información ni la capacidad suficiente para discernir en un primer momento, si los partidos están aliados o no en todos los distritos en disputa -a pesar de que

las disposiciones electorales vigentes señalan que los partidos sólo pueden integrarse a una sola coalición en cada proceso electoral, como lo indica la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) en su artículo 87, numeral 15), además de que la boleta misma no le informa al votante de que la marcación en más de un logo partidario puede conllevar a la interpretación de un reparto proporcional de los votos conforme a lo que se haya establecido en el convenio de coalición respectivo; o bien a la anulación plena de dicho voto al haberse marcado de manera incorrecta dos o más logos, situación que se da en la medida que una coalición vigente para un cierto tipo de cargo no lo es para otro, como ocurre muchas veces en el ámbito de los distritos de mayoría relativa.

En este caso, la obligación que cada partido posee dentro de un convenio de coalición -para los efectos de la demostración de su fuerza individual- deben inscribir por separado su propia lista de integrantes por el principio de representación proporcional para las 5 circunscripciones existentes (LGPP, artículo 87, numeral 14) es otro factor poco conocido y mucho menos comprendido por el electorado al momento de emitir su voto.

No obstante, dicho déficit de información hasta el momento puede valorarse en un nivel de bajo impacto dentro de los resultados generales mostrados por los diversos procesos electorales federales desarrollados durante el periodo bajo estudio. Sin embargo, existen evidencias de que estos errores han generado efectos en los resultados para coaliciones como por ejemplo la integrada por el PRI y el PVEM en el año 2012, en la cual dichos partidos perdieran varias contiendas distritales al no ir juntos de la misma manera que la pactada para la elección presidencial.

De esta manera, se hará un acercamiento primero al marco legal prevaleciente que sustentó al régimen de alianzas, candidaturas y coaliciones durante el periodo que se analiza. Posteriormente, se ubicará para cada elección federal la presencia de dichos ejercicios de participación política, con énfasis en el ámbito de las contiendas legislativas al nivel de las diputaciones federales, precisamente con el objetivo de ver los impactos que las disposiciones tuvieron en el esquema de la contienda partidaria.

## **I. Ventajas y desventajas de la formación de alianzas en el sistema electoral mexicano. Una revisión histórica.**

La literatura especializada en los sistemas electorales y partidarios muchas veces pasa de largo el tema de la conformación de las alianzas, frentes y coaliciones, dando por supuesto que discutir la importancia de permitir la formación de alianzas es una obviedad de naturaleza estratégica que se presenta para los partidos y por ende, solamente se le destina una mínima mención técnica y legal, pero sin averiguar si dicha decisión posee o no alguna repercusión para los resultados y los rendimientos electorales de los actores que decidieron formarlas.

Sin embargo, si uno examina más profundamente la presencia de estos mecanismos, uno se podrá dar cuenta que dicho régimen se ha ido cerrando y ya no existe tanta flexibilidad como la que prevalecía en su punto de inflexión más alto en las elecciones federales de 1988, como ocurrió con la posibilidad de formar los frentes electorales y utilizar la figura de la llamada “candidatura común”, consistente en la posibilidad de que los partidos podían concurrir al proceso electoral mediante un acuerdo que se registraba ante la entonces Comisión Federal Electoral (todavía dependiente de la Secretaría de Gobernación), en el cual se estipulaba que los partidos suscriptores de dicho convenio presentaban una candidatura común, que permitía la aparición del nombre de la persona nominada en el recuadro individual de cada organización participante. De esta manera, cada partido podía conservar por separado la posibilidad de registrar una plataforma propia (o aquella que fuese convenida en común), y lo más importante, que cada una podría conservar la asignación de prerrogativas para gastos de campaña que le hubiera sido asignada.

Como sabemos, los resultados de la elección de 1988 fueron polémicos, y estuvieron a punto de costarle la presidencia al entonces partido hegemónico del sistema como lo era el PRI. Ello derivó en la llamada contrarreforma electoral de 1990, en la cual se decidió ir en la ruta de reducir las posibilidades de la formación de frentes, y obligar con ello a que los partidos interesados en formar algún tipo de alianza se vieran formados a integrarse bajo una sola plataforma y un solo presupuesto de campaña, dando así paso a los llamados convenios de coalición, con lo que los partidos opositores al PRI vieron evidentemente más limitadas las posibilidades de derrotar al PRI a menos de que se tomaran este tipo de alternativas.

Como puede apreciarse, los riesgos de ir a los esquemas de fusión total previstos en la ley tampoco eran atractivos generaba que la repartición de porcentaje de los votos entre dichas organizaciones fuese una de las cláusulas más importantes a considerar (como lo sigue siendo hasta el presente) al momento de canalizar los votos recibidos, así como la asignación que tendrá cada partido por los escaños ganados conforme a lo pactado dentro de dichos convenios de coalición, ya que se obligaba de lleno a integrar bajo un solo registro la suma de los partidos pactantes, en tanto dichas organizaciones se jugaban su permanencia al “todo o nada” en caso de no reunir la votación mínima nacional requerida para conservar su registro como partidos en lo individual,

Por ello, cuando se pacta la reforma electoral de 1996, las opciones para regular el régimen de alianzas y coaliciones sólo pudieron tener modificaciones muy mínimas. De hecho, las opciones generadas por los partidos opositores se concentraron en seguir aprovechando los resquicios que había en el plano de las contiendas estatales y municipales, en donde todavía hubiese la permanencia de las figuras de constituir frentes y / o candidaturas comunes sin las restricciones de presentarse bajo un convenio único que les obligase a trabajar bajo un solo logo, una sola plataforma y un presupuesto único de campaña.

Lo que surgiría de ese proceso serían las llamadas alianzas “anti-natura”, expresión con la cual se daba a entender que la integración de frentes integrados por partidos opositores con ideologías contrapuestas de izquierda y derecha para enfrentar al PRI, especialmente encabezadas por el PRD y el PAN, cuyo carácter pragmático se sostenía a partir de la lectura de analizar qué organización se hallaba mejor posicionada entre el electorado y a partir de ello se podía hacer la distribución de las personas por distritos de las personas que se apoyarían por dichos partidos, a los cuales eventualmente se podrían sumar mediante los convenios respectivos, partidos de naturaleza local, así como asociaciones políticas nacionales o locales, según fuese el caso. Ello motivaría a que se alzarán voces reclamando que se procediera a legislar en sentido restrictivo dichas alianzas, con el pretexto de señalar que las mismas “confundían” al electorado, a la par de que se generaban dudas sobre los alcances y las responsabilidades que asumirían los gobiernos emanados de dichos esquemas.

Sin embargo, a partir de una revisión puntual de los resultados electorales generados en esos años, las alianzas “antinatura” o “contrahegemónicas” dieron resultados variados (aunque tendientes al éxito) por quienes las emplearon para acelerar el proceso de competencia y las consecuentes alternancias a lo largo y ancho del país. De manera sustantiva, los resultados de la elección del año 2000 reflejaron en parte esos elementos, en tanto el PAN y PVEM (Alianza por el Cambio) integraron una coalición, mientras que por su parte el PRD encabezaría a un bloque de partidos más amplio, como lo fue con los casos del PT, Convergencia, el PAS y el PSN (Alianza por México), aunque como sabemos el resultado a nivel nacional se colocaría más a favorecer a la primera de las alianzas mencionadas.

El tema de la formación de alianzas y coaliciones sería afectado de alguna manera con las reformas pequeñas emprendidas antes de los comicios de 2006, y de manera posterior con la macro reforma de 2007 -2008. Estas se concentraron de manera específica en acotar la formación de coaliciones a partir de la restricción hecha a los partidos de nueva creación para que no pudieran integrarse a este tipo de figuras al menos en dicha primera elección en la cual participarían, con lo que tendrían que demostrar la posesión del porcentaje mínimo nacional para conservar dicho registro. En cierta medida, se respondía a la crítica de que el sistema electoral propiciaba la formación artificial y discrecional de fuerzas que con un mínimo esfuerzo podían beneficiarse del presupuesto público. El hecho más claro es que la ruta hacia un pluripartidismo extremo (mayor a 10 partidos), como el que se había tenido en las elecciones federales de 2003, comenzó a experimentar una disminución para colocarse en el nivel de 7-8 organizaciones que ha sido el promedio que se ha conservado hasta el presente.

De manera posterior, tendríamos los ajustes llevados a cabo con la reforma político-electoral de 2014, la cual trasladaría el tema de la formación de coaliciones como parte de la naciente Ley General de Partidos Políticos. En dicho ordenamiento se determinaron las condiciones con las cuales los partidos deben regirse en caso de querer formar alianzas de tipo electoral, distinguiéndolas ahora bajo la modalidad de fusiones (integración de 2 o más partidos en uno solo), acuerdos de participación (que podrán suscribir con las asociaciones políticas nacionales) y la de coaliciones, mismas que se pueden dar entre los partidos nacionales para las elecciones de tipo federal, así como de los partidos nacionales con los de índole local para los comicios que se

desarrollen desde el ámbito de las entidades federativas (LGPP, artículo 85, inciso 2 y 87, incisos 1 y 2). Las coaliciones entre los partidos pueden darse bajo tres modalidades: totales, parciales y flexibles. (LGPP, artículo 88, numeral 1). Las primeras se integran como la postulación de los mismos candidatos en todos los distritos bajo una misma plataforma electoral y lo tendrán que hacer para todos los puestos en disputa (presidencia, senadurías y diputaciones). Las segundas se refieren a la presentación del 50% de candidaturas bajo una plataforma electoral común (LGPP, art. 88, numeral 5). Y las terceras se remiten a la postulación de un mínimo de 25% de candidaturas a cargos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. (LGPP, artículo 88, numeral 6). En todos los casos, el manejo de los recursos y gastos deberán contabilizarse como el equivalente a una sola fuerza, y así deberán reportarlo en sus estados financieros para efectos de la fiscalización de sus reportes de ingresos, gastos de campaña y uso de tiempos en medios. (LGPP, artículo 91, numerales 2 y 3).

Durante los tiempos donde no hay contienda en curso, los partidos podrán integrarse en frentes (connotación distinta a la que tenía hace años atrás) que ahora sirven para estructurar posicionamiento y colaboración comunes para propósitos de intervenir en el debate público. (LGPP, artículo 23, inciso f, 85, inciso 1 y 86).

Esto se sumaría al hecho de que como parte de este esfuerzo de negociación entre las tres fuerzas políticas principales que conformaron al llamado “Pacto por México” se avanzara además en trasladar los alcances de las coaliciones electorales hacia los planos parlamentario y administrativo, con la aprobación de medidas asociadas con la posibilidad de integrar “gobiernos de coalición”, que plasman dentro de la Constitución (aunque a la fecha no posee una ley reglamentaria en la materia), la posibilidad de que el Ejecutivo anuncie la integración de un gabinete pluripartidista que se guíe con un programa de trabajo que deberá ser presentado ante el Congreso para su respectiva aprobación y posterior evaluación al momento en que dicha coalición se disuelva.

## **II. Un acercamiento somero al desempeño de las coaliciones.**

En esta sección de la presente ponencia, se hará un acercamiento básico a las diversas experiencias que se han tenido para la integración de alianzas y coaliciones en el ámbito federal. Recuperando la opinión de Francisco José Paoli Bolio (2012), se pueden identificar dos efectos relevantes que se presentaron a partir de que la apertura electoral y el uso de dichas estrategias. Por una parte, éstas permitieron la generación de formatos de competencia primero de corte bipartidista (en donde el partido de gobierno enfrentaba regularmente a la oposición unificada, misma que beneficiaba al partido mejor posicionado dentro de dicha coalición), tendencia que se puede ver a lo largo de la etapa inicial de la transición democrática entre los años 1979 a 2000. Y un segundo momento se puede ubicar una vez lograda la alternancia en el poder, por cuanto se comenzó a experimentar un proceso de desagregación y desplazamiento de las preferencias electorales hacia formatos bipartidistas y tripartidistas, en los cuales se comenzaba a dar una falta de predominio por alguna fuerza en específico, con lo que dicha fragmentación terminaría por generar la necesidad de concertar alianzas obligadas más allá de lo electoral a efecto de garantizar niveles mínimos de gobernabilidad en los procesos legislativos y en la concertación de políticas públicas, cuyo resultado más elocuente sería llegar a la determinación de promover la reforma constitucional relativa a la instauración del llamado “gobierno de coalición”.

Sin embargo, dicha dispersión creciente y la falta de resultados tanto en la experiencia de las 2 gestiones presidenciales a cargo del PAN (que decidió presentarse en solitario en el 2006, dado que no quiso repetir la mala experiencia que le dejó su alianza con el PVEM en las elecciones del año 2000 y donde enfrentó una competencia muy cerrada con el PRD y sus aliados PT y Convergencia), como lo que ocurrió posteriormente con el retorno del PRI en el 2012 (a partir de su alianza con el PVEM, ya existente desde el 2006, y a la cual se sumaría el PANAL), ello daría pauta a una fractura desde el lado de la izquierda con la formación de un nuevo partido en 2015 como lo sería el caso de MORENA, el cual de manera inusitada tendría un poderoso efecto de arrastre al punto de integrar una alianza con el PT y con el PES (un partido con antigüedad similar a MORENA, pero que captaba a un segmento de votantes de índole más conservadora), mientras que los otros partidos surgidos del esquema tripartidista decidieron formar otras dos coaliciones: la integrada por el PAN, el PRD y el MC (antes Convergencia), así como la integrada por el PRI

junto con el PVEM y el PANAL, en un intento de repetir la fórmula que les hizo ganar la presidencia en los comicios de 2012.

Lo experimentado en los comicios de 2018 puede verse bajo el marco de la teoría de la coyuntura de una elección crítica, en la medida que se produce un notorio desplazamiento de las preferencias electorales hacia la integración de una mayoría fuerte como la obtenida por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador con el 53% de los sufragios totales emitidos, situación que no se había experimentado desde 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari ganó superando apenas el 50% de la votación. Este realineamiento también estaría acompañado de un apoyo muy importante en el plano legislativo otorgándole a la coalición “Juntos Haremos Historia” un mandato que le acercaría a los niveles necesarios para modificar la Constitución en la medida que el PVEM decidiría sumarse al naciente bloque gubernamental, cosa que ha mantenido hasta el presente junto con el PT. El PES a pesar de no haber preservado su registro en 2018, fue mantenido artificialmente como grupo parlamentario en ambas cámaras, pese a que en sentido estricto no le correspondía, en virtud de la cantidad de diputados y senadores de mayoría relativa que había logrado precisamente a partir del convenio de coalición firmado.

Las tendencias observadas en el ámbito federal se han visto extendidas hacia los procesos de renovación de los poderes dentro de las entidades federativas, en un muy rápido proceso de alternancia a favor del partido gubernamental y sus aliados. Ese proceso en 2021 sufrió una disminución en sus apoyos, en tanto de manera novedosa, los partidos suscriptores del Pacto por México decidieron integrar un bloque opositor electoral bajo la denominación “Va por México”, mismo que lograría limitar las condiciones a MORENA y sus aliados de reunir los votos suficientes para poder enmendar la Constitución en ambas cámaras, aunque no pueden impedir la aprobación de reformas a las leyes secundarias.

Bajo este escenario general, resulta importante valorar que las tendencias actuales estarían dando paso a un proceso de reconcentración y recentralización del sistema electoral, haciendo retornar a un formato de competencia en donde el partido dominante enfrenta a un bloque de partidos opositores que se encuentran notoriamente deslegitimados y que no poseen un epicentro discursivo atractivo más allá de la simple crítica a la narrativa y las acciones de corte populista que

caracterizan al gobierno de AMLO. La falta de renovación de fuerzas partidistas en 2021 con el fracaso de organizaciones como RSP, FXM y el PES que no tenían una verdadera novedad en tanto se declararon cercanas al presidente, y con el impedimento del registro a México Libre (en tanto separación del PAN, pero con un potencial de desarrollo), obligan a ir a la contienda presidencial de 2024 con un marco de competencia que solo se prevé pudiera cambiar en sus tendencias a partir de que hubiera desacuerdos y fracturas relevantes al interior del partido gobernante, o que se produjera una diferencia significativa con sus aliados PT y PVEM. Es menos probable que la oposición esté en condiciones de presentar una candidatura lo suficientemente fuerte para revertir los niveles de apoyo que actualmente posee MORENA gracias al efecto AMLO, aunque ello dependerá claramente de cómo puedan darse las decisiones mencionadas líneas atrás.

### **III. A manera de conclusión.**

El régimen de integración de coaliciones ha sido una variable de modelación e integración de nuestro sistema electoral y de partidos que sin duda demanda una mayor atención entre quienes estudiamos el caso mexicano, a efecto de dimensionar como el uso de las mismas puede potenciar o no la concentración o dispersión estratégica de las contiendas durante los próximos años. Es evidente que los partidos deben asumir los costos que van asociados con ellas, máxime cuando dichas tendencias se van moviendo hacia un contexto de mayor polarización y concentración de las preferencias a partir de razones no sólo ideológicas, sino de abierta personalización de las opciones existentes, lo cual complica aún más los ámbitos de la formación de las preferencias que pueda mostrar el electorado.

Por ello, el uso de las coaliciones electorales debe ser estudiado para ver los alcances que poseen a partir de la presencia del fenómeno de la reelección legislativa en los cargos legislativos y presidencias municipales, a efecto de ver si dichas candidaturas se preservan con los mismos partidos participantes desde la primera elección y las subsecuentes participaciones, un fenómeno que se verá por segunda ocasión para el caso de diputaciones federales y por vez primera para el Senado en los comicios de 2024.

Adicionalmente, el régimen de coaliciones no ha sido revisado con respecto a las condiciones que propician o no su empleo en el marco de la presencia de las llamadas acciones afirmativas. Esto es, revisar si los partidos políticos tienen o no alguna consideración alrededor de los temas de la paridad entre géneros, así como para facilitar la incorporación de los diversos grupos que han venido a ser reconocidos como actores relevantes en materia de la representación (afrodescendientes, migrantes, discapacitados, comunidad LGTBIQ+).

Esto nos dirá mucho acerca de la propia capacidad organizativa y de la congruencia ideológica con que los partidos basan dichas acciones para ratificar dichas postulaciones, a partir precisamente de la evaluación realizada sobre la rentabilidad que dichas alianzas hayan generado a cada organización en términos de beneficios.

#### IV. Fuentes consultadas.

##### Bibliografía

- Córdova, L. y Núñez, E. (2021). *La democracia no se construyó en día*. México: Grijalbo.
- Paoli Bolio, F. J. (2012). “Tiempo de coaliciones: cinco lustros de elecciones en México”. *Revista IUS*, 6 (30), 136-148. Se puede consultar en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1870-21472012000200008&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472012000200008&lng=es&tlng=es).
- Reynoso, D. y Espinosa Santiago, O. (coords.). *¿Alianzas contra natura o antihegemónicas? Las alianzas PAN-PRD en los estados mexicanos*. México: Tirant Lo Blanch / BUAP.
- Romero Ballivián, S. (2018). “La reforma electoral de México de 2014”, en Ferrer MacGregor, E.; Higuera, G. y López Noriega, S. (coords.). *Fortalecimiento de derechos, ampliación de libertades, t. II*. México: FCE, pp.61-106.

##### Legislación

- Instituto Nacional Electoral. Convenios de coalición y acuerdos de participación. Se puede consultar en el siguiente vínculo: <https://www.ine.mx/actores-politicos/convenios-de-coalicion/>
- Ley General de Partidos Políticos (2014, con última reforma publicada en el DOF el 27-02-2022). Se puede consultar en el siguiente vínculo: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP.pdf>

## ANEXO

## Lista de coaliciones en elecciones federales (1988-2021)

Siglas o nombre de la coalición	Partidos integrantes	Elección
FDN Frente Democrático Nacional	PPS-PARM-PFCRN-PMS	Presidencial 1988
AM Alianza por México	PRD-PT-Convergencia-PSN-PAS	Presidencial 2000
APC Alianza por el Cambio	PAN-PVEM;	Presidencial 2000
APT Alianza para Todos	PRI-PVEM	Legislativas 2003
CBT Coalición por el Bien de Todos	PRD-PT-Convergencia	Presidencial 2006
AM Alianza por México	PRI-PVEM	Presidencial 2006
SM Salvemos a México	PT-Convergencia	Legislativas 2009
PM Primero México	PRI-PVEM	Legislativas 2009
MP Movimiento Progresista	PRD-PT-MC	Presidencial 2012
CM Compromiso por México	PRI-PVEM	Presidencial 2012
Coalición Parcial (sin denominación)	PRI-PVEM	Legislativas 2015
Coalición Flexible Izquierda Progresista	PRD-PT	Legislativas 2015
Coalición Parcial Por México al Frente	PAN-PRD-MC	Presidencial 2018
Coalición Parcial -Senadores y Flexible-Diputados Todos por México	PRI-PVEM-PANAL	Presidencial 2018
Coalición Parcial Juntos Haremos Historia	MORENA-PT-PES	Presidencial 2018
Coalición Parcial Va por México	PAN-PRI-PRD	Legislativas 2021
Coalición Parcial Juntos Haremos Historia	MORENA-PT-PVEM	Legislativas 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del INE en la sección Convenios de Coalición y Acuerdos de Participación. <https://www.ine.mx/actores-politicos/convenios-de-coalicion/>